

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N° 77

Medellín, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso interpuesto y el grado de consulta en favor de la entidad pública en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **GONZALO BEDOYA BECERRA** contra **COLPENSIONES- Departamento Valle Del Cauca y la UGPP**.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El demandante solicita que se declare como beneficiario del régimen de transición establecido en el art. 36 de la ley 100 de 1993 y adquirió los requisitos desde 30 de junio de 2012, se condene a reconocer la pensión de vejez con base en lo contenido en el art. 12 del Decreto 758 de 1990, intereses moratorios establecidos en el art. 141 de la ley 100 de 1993 y costas del proceso.

Que se dejen sin efecto las cotizaciones realizadas como independiente a partir de diciembre de 2013 y se tenga en cuenta su desafiliación desde el 30 de abril de 2012.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones indica que nació el 19 de febrero de 1944, al 1 de abril de 1994 contaba con 50 años de edad, siendo beneficiario del régimen de transición establecido en el art. 36 de la ley 100 de 1993.

Cuenta con tiempos públicos sin cotizaciones entre el 18 de enero de 1981 y 14 de septiembre de 1982 en la Gobernación del Valle del Cauca, del 5 de octubre de 1983 al 30 de diciembre de 1986 en la Contraloría General y en el ISS 247 semanas al 1° de junio de 2009, posteriormente cotizó como independiente.

El 12 de abril de 2010 solicitó pensión con la seguridad de acreditar los requisitos para la pensión de vejez, además de haberse desafiliado el 30 de abril de ese mes.

Por medio de la Resolución GNR219846 del 29 de agosto de 2013 la entidad negó el reconocimiento de la pensión de vejez, en razón a que el actor no contaba con las semanas que requería para acceder a la misma, bajo el Decreto 758 de 1990 y no era posible sumar tiempo públicos sin cotización con cotizaciones al ISS.

Cuenta con 1000 semanas cotizadas, con la certificación de tiempo públicos lo que le da el derecho a la pensión reclamada, por lo que con la negativa se indujo en error obligándolo a cotizar como independiente, a partir del 2013, porque se le dijo que necesitaba 1300 semanas.

El afiliado ha solicitado en diferentes oportunidades la corrección de la historia laboral y siempre lo hacen de manera incorrecta antes disminuyendo las semanas cotizadas.

Por lo anterior cuenta con los requisitos para acceder a la prestación desde el 30 de junio de 2010, pues no se deben tener en cuentas las cotizaciones como independiente.

Respuesta de Colpensiones

Entidad que, por intermedio de apoderado, indicó que en general no le constan los hechos de la demanda, pero que no beneficiario del régimen de transición, por tanto, no es cierto que haya sido inducido en error de ninguna manera.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Inexistencia de la obligación, inexistencia de causa para pedir pensión de vejez, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas y compensación.

Respuesta Departamento Valle Del Cauca

Entidad que manifestó que, se opone a cualquier condena en cuanto que favorezca al señor Gonzalo Bedoya Becerra, dado que no tiene legitimación en la causa por pasiva en esta acción y no ha generado ningún tipo de negación de derechos ciertos e indiscutibles en los que este inmerso el demandante ni tampoco es competente para solucionar las pretensiones de la demanda y menos calificar el régimen pensional que lo beneficia si le corresponde o no al régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993, dado que solo responderá por las certificaciones de los tiempos laborados en esta entidad.

El señor Gonzalo Bedoya Becerra, laboró para el Departamento del Valle del Cauca en el periodo 18 de marzo de 1981 hasta el 14 de septiembre de 1982 según certificación expedida por la Secretaria de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Valle del Cauca, el día 11 de marzo de 2009.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Buena fe y cobro de lo no debido.

Respuesta de UGPP

Respondió a través de apoderada que no le constan en general los hechos de la demanda.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Inexistencia de la obligación, buena fe, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

Sentencia de primera instancia

El Juez Once Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **11 de abril de 2022**, Condenó a Colpensiones de la siguiente manera:

DECLARAR que el señor GONZALO BEDOYA BECERRA quien se identifica con cédula de ciudadanía Nro. 16'235.889 es beneficiario del régimen de transición reglado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por cumplir a cabalidad los requisitos legales y jurisprudenciales, por lo que le tiene derecho a que se le reconozca la prestación económica de pensión de vejez bajo los parámetros definidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990

CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE representada legalmente por su presidente Doctor MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ o por quien haga sus veces, a reconocer y a pagar a la masa sucesoral del señor GONZALO BEDOYA BECERRA quien se identificaba en vida con cédula de ciudadanía Nro. 16'235.889, la prestación económica de PENSIÓN DE VEJEZ, a partir del 07 de septiembre de 2015, y hasta el 09 de mayo de 2020, conforme la liquidación efectuada por Colpensiones EICE, que realizará de conformidad con los artículos 21 de la Ley 100 de 1993 y 21 del Acuerdo 049 de 1990 sin perjuicio de los incrementos de Ley y sobre 14 mesadas pensionales

suma de dinero de la cual se autoriza a La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, para que descuento correspondiente al aporte al sistema general de seguridad social en salud que serán consignados en el ADRES.

DESCONTAR del RETROACTIVO PENSIONAL, los valores pagados por concepto de pensión de invalidez del señor GONZALO BEDOYA BECERRA

CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar a la masa sucesoral del señor GONZALO BEDOYA BECERRA quien se identificaba en vida con cédula de ciudadanía Nro. 16.235.88, los intereses moratorios sobre cada una de las mesadas pensionales reconocidas en la presente sentencia, desde el 07 de diciembre de 2015, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.

Las COSTAS, están a cargo de la entidad demandada dentro de las cuales se fija como agencias en derecho el valor equivalente a \$4.000.000.00

Prospera parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN propuesta por la procuradora judicial de la entidad demandada, las demás no constituyen medios exceptivos.

ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES de las demás pretensiones incoadas en su contra.

AOBSOLVER, a la UGPP Y LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA de las pretensiones formuladas por el señor Gonzalo Bedoya Becerra.

Recurso Colpensiones

El apoderado presente recurso parcial frente a la decisión en el sentido de que el actor presentó el 14 de septiembre de 2018 solicitud de pensión de invalidez y fue negada, luego se le concedió por contar con una PCL del 73% estructurada a partir del 17 de 04 de 2018.

Ahora, bien cuando reclamó la pensión de vejez no acreditó ni 500 semanas ni 1000, por ello era claro que debía decirle la entidad que procediera a seguir cotizando, porque no era permitido la sumatoria de tiempos con el Decreto 758 de 1990, además la sumatoria de tiempo fue posterior con el cambio de jurisprudencia. Siendo así no hay inducción en error de ninguna manera.

Menos aún alegar el tema de que no se tengan en cuenta las cotizaciones posteriores como independiente, no es lógico, porque con esas se tuvo en cuenta para el estudio de su pensión de invalidez en el año 2018.

Referente a los intereses moratorios consagrados en el art. 141 de la ley 100 de 1993, tampoco se pueden conceder, porque la negativa obedeció a lo que ordenaba la ley, siendo ahora un cambio de jurisprudencia que lo permite, no existiendo desconocimiento por parte de la entidad.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado establecido en la ley 2213 de junio de 2022. La UGPP manifestó:

Fundamento la defensa en los siguientes argumentos de hecho y de derecho, con base en los cuales se formularon con antelación las excepciones propuestas: Corte Constitucional Mediante sentencia C-895 de 2009 en la que determinó que las obligaciones de cuotas partes pensionales son de naturaleza financiera y crediticia, estableciendo lo siguiente: “las cuotas partes pensionales son un importante soporte financiero para la seguridad social en pensiones, con un origen que antecede al sistema de seguridad social previsto en la ley 100 de 1993, y que representan un esquema de concurrencia para el pago de las mesadas pensionales, a prorrata del tiempo laborado en diferentes entidades o de las contribuciones efectuadas, que constituyen obligaciones de contenido crediticio a favor de la entidad encargada del reconocer y pagar la pensión, con las siguientes características: (i) se determinan en virtud de la ley, mediante un procedimiento administrativo en el que participan las diferentes entidades que-deben concurrir al pago. (ii) se consolidan cuando la entidad «responsable reconoce el derecho pensional. (iii) se traducen en obligaciones de contenido crediticio una vez se realiza el pago de la mesada al ex trabajador.” Ahora, desde esta perspectiva es conveniente revisar el objeto de creación de la Página 6 de 12 UGPP, que en materia pensional tiene una connotación específica, tal como lo señala el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007: Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Corregido por el art. 1, Decreto Nacional 1193 de 2012. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo: i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales-como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; (...) _ La UGPP ejercerá sus funciones de acuerdo con lo que defina la reglamentación que en el ejercicio de sus potestades

constitucionales expida el Gobierno Nacional, la cual deberá tener en cuenta el objeto y funciones que correspondan a la Administradora de Régimen de Prima Media a que se refiere el artículo anterior, y a las que la Unidad Administrativa Especial le corresponda. En este sentido se expidió el Decreto 169 de 2008, que delimitó aún más la competencia de la Unidad en el tema pensional: Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones.

En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones económicas 1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de actividades como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su reconocimiento y se Página 7 de 12 hubieren retirado o desafinado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a su cesación de actividades como administradoras. De igual manera, le corresponderá la administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las mencionadas administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.

El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca la UGPP en virtud de este numeral. Las entidades públicas del orden nacional a que se refiere el inciso anterior, continuarán con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas hasta que se asuma esta función por su traslado a la UGPP. La UGPP asumirá esta función en los términos del Decreto 254 de 2000.

Las demás gestiones y funciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este artículo tales como la administración de bases de datos, nóminas, archivos y todo lo relacionado con la defensa judicial de la entidad y las demás que establezca la ley. Así mismo, el decreto 575 del 22 de marzo 2013 mediante el cual se modifica la estructura de la UGPP y se determinan las funciones de sus dependencias estableció dentro del objeto y funciones lo siguiente: Artículo 2° Objeto. En los términos establecidos por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto Ley 169 de 2008, la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP tiene por objeto reconocer y administrar los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional o de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando.

Conforme a lo expuesto, las cuotas partes corresponden a obligaciones financieras. Situación por la que no hacen parte del traslado de funciones a la UGPP y por lo Página 8 de 12 tanto, los pasivos en esta materia, que se hayan causado y consolidado con anterioridad a la fecha en que se entregan las funciones pensionales a la unidad hacen parte del trámite de supresión o liquidación de la caja o fondo que las reconoció.

La UGPP solamente reconocerá las obligaciones de cuotas partes pensionales pasivas y activas que pertenezcan a nuevos reconocimientos pensionales, y que se presenten con posterioridad a la fecha de entrega de funciones pensionales a la Unidad. La gestión de las obligaciones financieras y crediticias al' no pertenecer a ninguna función pensional, excede la competencia de la Unidad, por lo que no es posible gestionar y administrar las cuotas partes pensionales causadas y consolidadas con anterioridad a la fecha de entrega de funciones, puesto que iría en contra del objeto por el cual fue creada la UGPP conforme a la Ley 1150 de 2007 que la encaminó al ejercicio de las funciones propiamente pensionales. Razón por la cual, esta Unidad no es competente respecto de las obligaciones por cuotas partes que se causaron con anterioridad a la asunción de funciones, por lo que estas obligaciones tendrán que ser atendidas por la caja o fondo en liquidación o por el Ministerio al cual estuvieren adscritas conforme a las disposiciones correspondientes aplicables en el tema de la liquidación o extinción de la respectiva entidad.

Así lo estableció el artículo 1 del decreto 1222 de 2013: el cual señala: Artículo 1.-Cuotas Partes por cobrar y por pagar a cargo de Cajanal EICE en Liquidación. En ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 35 del Decreto Ley 254 de 2000, modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN constituiré un Patrimonio Autónomo para la administración de las cuotas partes pensionales que hayan que dado a su cargo o que hayan sido reconocidas a favor de dicha entidad, derivadas de solicitudes radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011, de acuerdo con el término señalado en el numeral 10 del artículo 1o del Decreto 4269 de 2011; para lo anterior, se entregará al Patrimonio Autónomo la información y

documentación requerida y al Ministerio de Salud y Protección Social, copia de dicha información.

Conforme lo anterior, se acredita un total de 1,166 días laborados, correspondientes a 166 semanas. Adicional a lo anterior, dentro del expediente pensional, certificado de información laboral expedido por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA de fecha 04 de abril de 2012, en esta se consignan periodos laborados por el señor BEDOYA BECERRA GONZALO desde el 05/10/1983 hasta el 30/12/1986, correspondientes a 1.166 días, los cuales fueron incluidos de forma correcta en el proyecto presentado por COLPENSIONES.

Que, en consecuencia, es del caso aceptar el proyecto de cuota parte pensional presentado por Colpensiones.

Finalmente, en la resolución se resuelve aceptar la cuota parte del señor BEDOYA BECERRA, en la proporción a cargo de la UGPP, distribuido de la siguiente manera: ENTIDAD: FONDO DE PENSIONES PUBLICAS –FOPEP DIAS: 1166 VALOR CUOTA: \$104.560.00 Se debe concluir, manifestando que de acuerdo a lo anterior es claro que mi representada, soportándose siempre en los soportes obrantes en el expediente administrativo del demandante, acepta la cuota parte pensional, cumpliendo y actuando en todo momento bajo los preceptos de la buena fe y el pleno cumplimiento de la norma.

Por lo tanto, de acuerdo a los argumentos de hecho y de derecho expuestos con antelación solicito al Despacho REVOCAR la sentencia de primera instancia y denegar las suplicas de la demanda y en su lugar declarar probadas las excepciones propuestas por mi representada en la contestación de la misma.

Alegatos Colpensiones

En este punto se hace importante informar a la sala que el demandante solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, la cual fue resuelta mediante Resolución SUB 293876 del 13 de noviembre de 2018, le reconoce pensión de invalidez en cuantía de \$781.242 desde el 01 de diciembre de 2018; y mediante resolución SUB 329306 del 24 de diciembre de 2018, se confirma íntegramente la resolución anterior, así las cosas se tiene que el demandante actualmente está percibiendo PENSIÓN DE INVALIDEZ, desde el 01 de diciembre de 2018 y hasta la actualidad en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente.

Teniendo en cuenta, las fechas anteriormente referenciadas, el a quo condeno a un retroactivo pensional a partir del 07 de septiembre de 2015 y hasta el 09 de mayo de 2020, de conformidad con el artículo 21 de la ley 100 de 1993 y 21 del Acuerdo

049 de 1990, cuando existe un reconocimiento por parte de la entidad a partir del mes de diciembre de 2018, por lo que se solicita a la sala sea revisada el periodo en el cual debe la entidad reconocer el respectivo retroactivo pensional. Igualmente, se condenó a Colpensiones a los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por parte del despacho, al considerar que, el señor GONZALO BEDOYA BECERRA era acreedor del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 conforme al acuerdo 049 de 1990, desde el 07 de diciembre de 2015. La imposición de los intereses moratorios debe hacerse desde el momento en el que vence el plazo legal para que la entidad de seguridad social otorgue el derecho pensional cuando se está frente a una sola petición de reconocimiento de la prestación (4 meses) -artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Cuando un afiliado se ve obligado a solicitar el derecho varias veces, por negligencia del ente administrador, en este caso la mora se causa, al momento en que se presentó la primera solicitud, si ya estaba consolidado el derecho.

Si tenemos en cuenta la fecha de reconocimiento del retroactivo se efectuó desde el 7 de septiembre del 2015, los cuatro meses iniciarían a partir del mes de enero de 2016 y no un mes antes como lo argumento el juez de primera instancia. Sin perjuicio de los argumentos ya expuestos, debe tenerse en cuenta que en sentencia SL11897-2016 de 24 de agosto de 2016, radicación 59673, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral dejó expresadas las razones por las que se predica la improcedencia de la sanción establecida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por la no acreditación de los requisitos legales exigidos para el reconocimiento de la prestación que se debate.

En el evento de considerarse la procedencia de intereses moratorios, se debe tener en consideración que estos empiezan a causarse a partir de la fecha en que la norma ordena el desembolso efectivo del monto de la mesada, esto es, a partir del vencimiento de los 6 meses que incluye 4 meses para el reconocimiento más 2 meses adicionales que se tienen para incluir en nómina en lo que respecta para las pensiones de vejez e invalidez; y a partir de los 3 meses que engloba 2 meses para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes más un mes adicional para la inclusión en nómina del solicitante. Posición que ha sido confirmada en senda jurisprudencia de la Corte Constitucional, como por ejemplo, en las sentencias T 588 de 2003, C-515 de 2019, C 1024 de 2004, T 586 de 2012, C 601 de 2000 y SU 065 de 2018 y en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 5541 del 14 de noviembre de 2018, SL 14528 de

2014, SL 4754 de 2019, SL 11897 de 2016, SL2358 de 2017, SL 4338 de 2019, SL4009 de 2019 SL1938 de 2020. Además, en lo atinente a intereses moratorios, es pertinente aclarar que estos no se causan cuando el accionante no reúne los requisitos para una prestación en sede administrativa, sino que los reúne o aporta dentro del proceso judicial, tal como consta en sentencia a sentencia SL11897 de 2016.

Por último, al liquidar las prestaciones reconocidas, los valores son actualizados por el Sistema y traídos a valor presente, es así como los salarios correspondientes a años anteriores se reajustan con el Índice de Precios al Consumidor reportados por el DANE de manera anual, así las cosas, se trata de una revalorización de las sumas reconocidas a través de la cual se pone en equilibrio el desbalance producido por la pérdida del poder adquisitivo del dinero, con lo cual se da por cumplido lo ordenado por el despacho no siendo posible acceder a la pretensión de otro pago por este concepto, ya que el mismo no procede.

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia conforme al recurso interpuesto y el grado jurisdiccional de consulta, serán: (i) establecer si el demandante es beneficiario del régimen de transición establecido en el art. 36 de la ley 100 de 1993 y acredita requisitos para acceder a la pensión de vejez bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990, (ii) si operó la prescripción (iii) valor del retroactivo y (v) si la entidad lo indujo en error y por ello debió continuar cotizando como independiente, y tiene un eximente para ser absuelta de los intereses moratorios establecidos en el art. 141 de la ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. El señor **Gonzalo Bedoya Becerra** nació el **17 de febrero de 1944**
2. El actor solicitó pensión de vejez el 12 de abril de 2012 y fue negada por la entidad, por medio de la Resolución GNR219846 del 29 de agosto de 2013, bajo el argumento que no acreditaba los requisitos para acceder a la misma, y no era posible sumar tiempos públicos con cotizaciones al ISS.
3. Para cuando reclamó pensión vejez, no contaba con requisitos del acto legislativo 01 de 2005, pues acreditaba 722 y solo semanas ISS 810.
4. El actor luego de la reclamación volvió a cotizar como independiente.
5. Le fue reconocida pensión de invalidez por medio de Resolución SUB293876 del 13 de noviembre de 2018.

6. El actor falleció el 9 de mayo de 2020, reconociéndose como sucesora procesal a la cónyuge.

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

Precedente constitucional en materia de sumatoria de tiempos públicos sin cotizaciones con semanas aportadas al ISS para la aplicación del Decreto 758 de 1990

En la sentencia **T-090 de 2009**, la Corte Constitucional al resolver el caso de una persona de 62 años de edad que en toda su vida laboral acreditaba con un total de 1007 semanas, (sumados tiempos públicos sin cotización con aportes al ISS) decidió amparar al derecho a la seguridad social a partir de la aplicación del *principio del indubio pro operario* en la interpretación del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, en el entendido de que se podía sumar semanas con la finalidad de acceder a la pensión de vejez.

Con posterioridad en providencia **T-181 de 2011**, la Corte reiteró su precedente comenzando por determinar si el demandante cumplía con los requisitos de Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988, para finalizar con los exigidos por el Decreto 758 de 1990, encontrando que el accionante en este caso no satisfacía los requisitos establecidos por estos regímenes pensionales. Siguiendo esta línea en la T-493 de 2013, le concedió el amparo al derecho a la seguridad social a una persona que sumadas las semanas cotizadas en el sector público sin aportes y las cotizaciones al ISS acreditaba un total de 1020 semanas.

Luego con el objeto de establecer un claro precedente el Alto Tribunal expidió la sentencia SU-769 de 2014, a partir de la cual dejó en claro que es posible sumar semanas cotizadas al ISS con tiempos de servicio público sin cotizaciones, esto con el fin de garantizar el derecho a la seguridad social y en aplicación de lo que denomina *principio pro homine* y favorabilidad, que se trata de la expresión del principio protector que opera en materia de seguridad social.

Finalmente, en la sentencia **T-508 de 2017** determinó las sub-reglas aplicables en los casos en que se pretenda la aplicación del Decreto 758 de 1990, estableciendo que: (i) quien pretenda que se le aplique el régimen de transición debe ser su beneficiario, luego, (ii) debe acreditar la prestación de servicios con el sector público (con o sin cotización a fondo público) y cotizaciones al ISS, (iii) no puede cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988 o Ley 100 de 1993; puesto que si cumple con alguna de

estas su derecho a la seguridad social se encuentra garantizado, sin que se deba acudir al Decreto 049 de 1990.

Desarrollo acogido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia SL-1947 de 2020, en la que sustentó su nueva postura, considerando que la Ley 100 de 1993 prevé diversos instrumentos de financiación de las pensiones, como: bonos, cálculos actuariales o cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna y dado que las pensiones de transición se causan en su vigencia, es procedente su computo sin distinción del origen. Al respecto de dijo en la decisión reseñada:

En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultraactiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.

En tal dirección, así debe entenderse el párrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un párrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este párrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad.

Del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez

Régimen de transición.

Referente a este aspecto se tiene que el actor nació el 17 de febrero de 1944, para el 1 de abril de 1994 contaba con 50 años de edad, cumplió 60 años el 17 de febrero de 2004 y cotizó en principio hasta el 30 de abril de 2012 y solicitó pensión de vejez el 12 de abril de 2012.

Ahora bien, el actor reclamó el 12 de abril de 2012 pensión de vejez y la entidad negó la prestación por medio de la Resolución GNR 219848 del 29 de agosto de 2013, bajo el argumento que no cumplía con los requisitos del Decreto 758 de 1990 y que no era posible sumar tiempos públicos sin cotizaciones al ISS para aplicar esa normatividad.

En el caso al analizar la prueba obrante en el proceso se tiene que efectivamente para el momento en que reclamó el actor no contaba con las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez, no era beneficiario del régimen de transición, porque, aunque lo fue con la edad, no contaba con 750 semanas a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005 y así poder conservar esa prerrogativa hasta el año 2014.

Es importante destacar que para la Sala cuando el actor reclamó Colpensiones negó la prestación bajo unos argumentos plenamente justificados, en razón que lo hizo apoyada en la normatividad vigente, que no permitía sumar tiempo públicos sin cotizaciones al ISS con cotizaciones efectivamente realizadas a esta entidad, aun la jurisprudencia no había cambiado el criterio respecto de la sumatoria de tiempo y el actor no contaba con los requisitos de la norma que pretendía, porque Colpensiones no le sumó el tiempo público correspondiente a 257 semanas laborado entre el 18 de enero de 1981 y el 14 de septiembre de 1982 para Gobernación del Valle de Cauca y entre el 5 de octubre de 1983 y 30 de diciembre de 1986 para la Contraloría General de la República, era apenas lógico que la entidad le dijera al actor que debía continuar cotizando para cumplir con los requisitos establecidos en la ley 797 de 2003.

De la inducción en error

Entonces considera la parte demandante que era beneficiario del régimen de transición porque al sumar los tiempos públicos podía acceder a ese beneficio, pero además mantenerlo hasta el año 2014, además pretende que se dejen sin efecto las cotizaciones realizadas posterior a la reclamación del año 2012, porque considera que fue inducido en error.

Por su parte el apoderado de Colpensiones en su recurso considera que el actor no fue inducido en error, toda vez que cuando ocurrió la negativa ésta se ajustó a los preceptos legales.

Respecto al tema la Sala encuentra que por regla general para el disfrute de la pensión de vejez es necesaria la desafiliación del sistema, esto conforme lo establecido en los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990 que mantuvieron vigencia luego de la entrada en rigor de la ley 100 de 1993, por así establecerlo el artículo 31 ibídem cuando indicó que se mantienen vigentes las disposiciones regulatorias de los seguros de invalidez, vejez y muerte

administrados por el Instituto en aquellos aspectos inherentes a esas prestaciones.

Pese a ello, la jurisprudencia ha identificado casos en que la aplicación irrestricta de la norma no resulta ser la adecuada, siendo los de mayor trascendencia el denominados como: (i) retiro tácito y la (ii) inducción en error, en el caso la parte actora aduce que debió seguir cotizando al Sistema de Pensiones por el error en que se le hizo incurrir por la entidad.

Al respecto debe decirse que el error es una equivocada o inexacta creencia o representación de la realidad jurídica o material, que sirve de presupuesto para la realización de un acto jurídico. En materia pensional la jurisprudencia especializada le ha atribuido consecuencias en el evento en que el afiliado no obstante haber causado la prestación por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicios, y solicitado su reconocimiento en forma oportuna, se ha visto apremiado a seguir cotizando debido a una conducta renuente o negligente al momento de estudiar la procedencia del derecho o negarlo aduciendo el déficit de aportes.

La sentencia precursora dentro de esta línea es la radicado 34514 del 1 de septiembre de 2009, en la que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al conocer el caso de una persona que solicitó la pensión de vejez cumpliendo con los requisitos, sin embargo, esta le fue negada por el **ISS** por no contar con el número suficiente de semanas, lo que llevó al demandante a vincularse al sistema efectuando nuevas cotizaciones; una posterior reclamación dio cuenta de que el demandante causó la prestación desde el primer momento negando el pago del retroactivo por existir cotizaciones posteriores, actuación desestimada por la Corte bajo el entendido que la negligencia del ISS no podía beneficiarlo en detrimento del afiliado. Tesis reiterada en la Sentencias radicados 39391 del 22 de febrero de 2011, 38558 del 6 de julio de 2011 y 44987 del 11 de mayo de 2016.

De la línea jurisprudencial citada se destacan los siguientes aspectos: (i) Debe existir una manifestación del afiliado tendiente al disfrute de la pensión de vejez, (ii) Debe haber un actuar negligente o errado de la AFP encargada de reconocer la pensión, que lleve al (iii) afiliado a seguir efectuando cotizaciones.

En el presente caso la Sala considera, que no existe la inducción en error que afirma el actor, toda vez que no se observa que se haya realizado solicitud pensional y la entidad le hubiere negado la prestación por falta de las semanas requeridas, de manera caprichosa, por cuanto para la fecha de la petición, la resolvió de manera ajustada a derecho, toda vez que fue con posterioridad que

la jurisprudencia consideró la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos y semanas efectivamente cotizadas, para acceder a la pensión de vejez, con régimen de transición.

De otro lado es importante mencionar que al actor se le reconoció pensión de invalidez por medio de la Resolución SUB293876 del 2018 y que para determinar este derecho se contabilizó hasta la última cotización, las que hoy se pretende no sean tenidas en cuenta por inducción en error.

De lo anterior se tiene que no le asistió razón al Juez de primera instancia y debe **REVOCARSE** la condena impuesta a Colpensiones y en su lugar absolver a esa entidad de todas las pretensiones incoadas en su contra.

Por substracción de materia y teniendo en cuenta que, al despacharse desfavorablemente la condena principal, no hay necesidad de pronunciarse frente a las pretensiones accesorias.

Costas

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora, en la primera se revocan las impuestas y quedan a cargo de la parte actora. Se señalan en esta instancia las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Once Laboral del Circuito de Medellín, el día **11 de abril de 2022**, en el proceso ordinario laboral promovido por **GONZALO BEDOYA BECERRA contra COLPENSIONES- Departamento Valle Del Cauca y la UGPP.**, en su lugar se absuelve a Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda, según las consideraciones que da cuenta la parte motiva.

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora, en la primera se revocan las impuestas y quedan a cargo de la parte demandante. Se señalan en esta instancia las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

Radicado 05001-31-05-011-2018-00623-01
Radicado Interno: P3523
Asunto Confirma sentencia

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**, el cual se fijará por el término de un día en la Secretaria de la Sala.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Gonzalo Bedoya Becerra
DEMANDADO	Colpensiones y otros
RADICADO	05-001-31-05-011-2018-00623-01
DECISIÓN	Revoca sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 31 de marzo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 31 de marzo de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO